

Estado-nacional popular, democrático e independiente” (“La nación: problemas teóricos e históricos”, en *Centroamérica: entre revoluciones y democracia*, antología compilada por Jorge Rovira Mas, p. 124). Todo parece indicar que al FSLN en su retorno no le importa acabar con la nación, dismantelar la maltrecha institucionalidad, construir nuevas dependencias –de Putin y Chávez– y aniquilar la democracia en su afán de gobernar desde abajo y desde arriba. Con tantas rupturas y malas imitaciones, Daniel Ortega queda protagonizando, cada vez más solo y despótico, el retorno de sí mismo.

José Luis Rocha es filósofo, profesor e investigador de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. Es también investigador asociado del Brooks World Poverty Institute de la Universidad de Manchester y dirige el Servicio Jesuita para Migrantes en Nicaragua. Correo electrónico: jlrochag@yahoo.com.

Anika Oettler

Nicaragua: orteguismo y feminismo

Cuando perdió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones de 1990, pocos se imaginaban que Daniel Ortega, comandante histórico de la guerrilla y presidente en los años ochenta, actuaría de una manera cínica y burlándose del pluralismo político al retornar a la presidencia casi dos décadas después. Daniel Ortega intentó una y otra vez recuperar el poder luego de su derrota electoral en 1990. Sin embargo, las pugnas internas –tanto la lucha por el control del partido como la disputa ideológica entre ortodoxos y renovadores– se acentuaron durante los

años siguientes, conduciendo a que muchas de las figuras emblemáticas dieran su espalda al Frente. Cuando las elecciones presidenciales de 2006 tuvieron lugar, la mayoría de los observadores políticos con vino en que el programa de Ortega se agotaba en viejos eslóganes izquierdo-populistas. En los últimos dos años, no obstante, muchos de éstos fueron sorprendidos por la velocidad, la perseverancia y el descaro con los que la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, socavaba los fundamentos de la democracia nicaragüense. Los acontecimientos políticos de los últimos meses en Nicaragua han puesto de manifiesto los síntomas de un proyecto presidencial guiado por un afán personal. La pareja presidencial ha puesto en marcha una campaña de hostigamiento y desprestigio dirigido contra todos los que expresen su oposición públicamente. La conocida escritora nicaragüense, Giaconda Belli, escribió recientemente que el orteguismo es “un proyecto que llaman socialismo, pero que de socialismo, por lo que hemos visto, sólo tiene el autoritarismo y el acorralamiento a las libertades que precisamente llevó al socialismo del siglo xx al fracaso”.

Los ejemplos siguientes demuestran que particularmente el movimiento feminista se halla bajo el fuego cruzado de las actividades de la pareja presidencial.

Zoilamérica Narváez y el feminismo nicaragüense

El movimiento feminista nicaragüense tiene sus raíces en la lucha contra la dictadura y, especialmente, en el proyecto revolucionario de los años 80. En 1990, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue destituido después de muchos años de guerra y estancamiento económico, el movimiento feminista

nicaragüense había logrado un alto nivel de organización que le distinguía de otros movimientos feministas en América Latina. Sin embargo, no se trataba de un movimiento homogéneo: se encontraba dividido en dos alas, una más tradicional alrededor de la organización de masas AMNLAE y otra feminista (más radical), que se manifestó e institucionalizó, entre otras cosas, en el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Las reformas neoliberales de los años 90 confrontaron a muchas instituciones pertenecientes al movimiento de mujeres (centros de salud femenina, centros de acogida) con nuevos desafíos que terminaron siendo los sostenes de una estructura mínima de asistencia social.

A mediados de agosto de 2008, Daniel Ortega sufrió un descalabro enorme en el escenario internacional. Poco antes de la solemne entrega de mando al nuevo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, la futura ministra de la Mujer en ese país, Gloria Rubin, había firmado una petición que decía: “Repudiamos la presencia en calidad de invitado oficial del violador Daniel Ortega Saavedra, que por 20 años esclavizó sexualmente a la hija de su esposa”. El gobierno nicaragüense no presentó al respecto ningún dictamen oficial, pero canceló el viaje presidencial a última hora, lo que representó un triunfo para la hijastra del presidente nicaragüense y del movimiento feminista, el cual exige, desde hace muchos años, el enjuiciamiento de tales crímenes.

En 1998, Zoilamérica Narváez había acusado en público a su padrastro de violaciones sistemáticas a lo largo de ocho años, hasta que cumpliera la edad de 19, y de haberle acosado sexualmente después. Mientras Ortega lograba evitar toda clase de sanciones penales insistiendo en su inmunidad parlamentaria, su esposa, Rosario Murillo, inculpó públicamente a su hija de haber mentado. En 2002, des-

pués de que varios intentos de proceder judicialmente contra Ortega fracasaran por la actitud negligente de los tribunales nicaragüenses a cargo del tema, Zoilamérica Narváez finalmente presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el movimiento feminista, el caso siempre representó un punto de cristalización en la disputa sobre las ideologías y las prácticas sexistas dentro de la izquierda, las cuales no sólo se manifestaban en los crímenes en sí, sino también en la reacción pública. En efecto, el trato mediático del caso y de las diferentes voces que aspiraban a refutar las afirmaciones de la víctima reflejaron el estado del debate sobre la violencia de género en Nicaragua, es decir, lo que muchos entendían como un síntoma secundario y poco importante de lo que en general se consideraba un machismo sano.

Por otra parte, el desastre diplomático de Paraguay de agosto de 2008 se reveló como una victoria temporaria para el movimiento feminista transnacional: apenas cinco semanas más tarde, Zoilamérica dirigió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo la suspensión de su causa. En dicho documento, la víctima argumentó que había decidido optar por el camino del diálogo, conducente a la comprensión y la reconciliación. Varias destacadas representantes del movimiento feminista y de la defensa de los derechos humanos mostraron su comprensión con respecto a la decisión de la hijastra del presidente que desde hacía años vivía bajo presión. No obstante, la decisión favoreció de hecho a Ortega y a todos los que ya lo habían apoyado en 1998. Desafortunadamente, el fracaso del intento de pedir cuentas a Daniel Ortega por sus delitos sexuales y de proceder judicialmente contra él es sólo un ejemplo más de las derrotas recientes de las reivindicaciones feministas.

Represión y confrontación

A dos años de la asunción del mando del gobierno que una vez sostuviera el eslogan “Paz y reconciliación”, las confrontaciones políticas se han agravado. En julio pasado, Dora María Téllez, la comandante histórica y actualmente diputada nacional, protestó contra la disolución de su partido, el Movimiento Renovador Sandinista, crítico con Ortega, poniéndose en huelga de hambre. Con ello, provocó una subsiguiente ola de protestas (por ejemplo, los hermanos Mejía Godoy prohibieron al gobierno que use sus canciones, conocidas en toda Nicaragua). De hecho, la mayoría de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales se han distanciado claramente del orteguismo desde el cambio de gobierno, aunque se supone que justamente éstos son los aliados naturales de un gobierno de izquierda.

En los últimos meses, el gobierno ha consolidado aún más su estilo de liderazgo autoritario y clientelar y ha continuado socavando los fundamentos institucionales del orden jurídico-estatal y del público crítico, atacando particularmente al movimiento feminista y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En octubre de 2008, Rosario Murillo, primera dama y secretaria de Comunicación, forzó a Dora Zeledón, la presidenta de la AMNLAE, la histórica asociación sandinista de mujeres, a dimitir de su cargo. Anteriormente, Zeledón había criticado públicamente al gobierno y había declarado que el Estado estaba derogando los derechos humanos por los cuales las mujeres habían luchado durante muchos años. Con esto hacía alusión, entre otras cosas, a la ley que regula el derecho al aborto y al hecho de que el delito de *feminicidio* hubiera sido borrado del código penal. Poco antes de la suspensión de la presidente de la

AMNLAE tuvo lugar la fundación de una nueva organización –el Movimiento de Mujeres Sandinistas– que ocupa una posición privilegiada con respecto a sus relaciones con el gobierno. El mismo calificaría a la AMNLAE de organización no gubernamental al servicio del imperialismo. Uno de los primeros actos oficiales de este nuevo movimiento fue la ocupación de las dependencias del Centro de Capacitación Sacuanjoche que pertenecía a la AMNLAE. Posteriormente, amenazó a la asociación con ocupar igualmente otros edificios y fue entonces cuando Zeledón presentó su dimisión.

Unas semanas antes de la fundación de esta organización opuesta a la AMNLAE, otra organización patrocinada por el estado, es decir por Rosario Murillo, ya se había presentado en público como una alternativa explícita al Movimiento Autónomo de Mujeres, al cual también había criticado como portavoz del imperialismo estadounidense. La enfermera norteamericana Dorotea Granados, quien fuera expulsada del país en los años 90, es una de las dirigentes encabezando este movimiento, denominado “Movimiento de Mujeres Blanca Aráuz” en honor a la esposa del histórico general Augusto César Sandino. Las primeras promulgaciones oficiales anunciaron que el nuevo movimiento prestaría por fin los servicios necesitados por las mujeres en el campo y que se trataba de una organización que se oponía al derecho al aborto y abogaba por restablecer la buena fama del matrimonio presidencial. El 19 de noviembre de 2008, el “Movimiento de Mujeres Blanca Aráuz” lanzó una proclamación responsabilizando a Eduardo Montealegre, candidato a la alcaldía de Managua, por la violencia postelectoral. En su mensaje, el movimiento enunció finalmente la frase: “Por la garantía de la dignidad y el respeto de los derechos de las mujeres, estamos con el presi-

dente Daniel Ortega, no tenemos miedo”.

La fundación de esta organización se ha realizado en un período en que el número de los ataques contra representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos y feministas ha aumentado. El 17 de octubre de 2008, por ejemplo, Vilma Núñez, la acreditada presidente durante muchos años del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fue atacada al salir del Ministerio de Asuntos Públicos con algunos colaboradores y periodistas. Los agresores formaban parte de los Consejos de Poder Ciudadano y los policías que estaban presentes no intervinieron. En ese mismo mes, inmediatamente antes de las elecciones municipales, se observó además una ola de registros violentos de los oficios pertenecientes sobretudo al centro de documentación CINCO y al Movimiento Autónomo de Mujeres. Para el público crítico, tales registros, que las autoridades justificaron como controles a las organizaciones que habrían efectuado transacciones financieras deshonestas, representan otro intento de intimidación.

En este contexto, la fundación de nuevas organizaciones más o menos feministas destinadas a competir con las ya existentes parece una continuación, sino una agudización, de las estrategias represivas. Evidentemente, la cuestión de género se ha convertido en uno de los blancos principales de la administración de Ortega. El foco de su crítica está dirigido, ante todo, a las feministas organizadas que lucharon vehementemente contra la prohibición general del aborto, ley que fuera promulgada poco antes de las elecciones presidenciales en 2006. Las declaraciones del presidente insultando a las feministas como abortistas, y la reciente inauguración presidencial de la plaza a la Biblia en Managua, se corresponden además con ciertas tendencias regionales. Según infor-

maba Radio Vaticano en septiembre de 2008: “Fuera de la lucha contra la pobreza hay otro tema que une a los obispos latinoamericanos: el esfuerzo para detener la legalización del aborto en el continente latinoamericano”.

Anika Oettler es socióloga e investigadora del GIGA German Institute of Global and Area Studies en Hamburgo, Alemania. Correo electrónico: oettler@giga-hamburg.de.

Peter Peetz

¿De hacendado a revolucionario? Mel Zelaya y el giro hacia la izquierda del gobierno hondureño

El 25 de agosto de 2008, el presidente de Honduras, Manuel “Mel” Zelaya, firmó para su país el convenio de adhesión a la iniciativa de integración regional propagada por Hugo Chávez, conocido bajo el nombre de ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). La decisión del gobierno hondureño quedó confirmada el 9 de octubre mediante la ratificación del convenio internacional por el Congreso Nacional. Después de dos años y medio de política exterior ambivalente —entre, por ejemplo, la instalación de una nueva base militar con el apoyo de los EE. UU. para combatir el narcotráfico (a mediados de 2006) y, por otro lado, la adhesión al esquema de venta de combustible de Venezuela, Petrocaribe (ratificado por el Congreso nacional en marzo de 2008)— parece que Zelaya terminó optando por el lado izquierdo, pro Chávez y por lo tanto anti EEUU, en su manejo de las